



Cive Pérez

Licenciado en Ciencias de la Información, rama periodismo. Jubilado. Miembro del Observatorio de Renta Ciudadana de Attac Madrid.
ciudadanoperez@gmail.com

La sabiduría convencional sostiene que el trabajo no sólo es fuente de virtudes, sino también de riqueza. Y es cierto que en una época no demasiado lejana, a la vez que el sistema productivo era capaz de ofrecer empleo para la mayoría de la población, el movimiento organizado de los trabajadores consiguió que el esfuerzo laboral fuese remunerado de una forma acorde a la riqueza generada, permitiendo que una mayoría de asalariados accedieran a un aceptable nivel de vida. Hoy, las ventajas generales del trabajo asalariado han desaparecido del panorama social. El empleo, al menos en la dimensión en que lo hemos conocido en las sociedades desarrolladas, no volverá a desempeñar el mismo papel de integración social que tuvo hasta hace dos décadas.

De entrada, conviene distinguir entre trabajo y empleo, dos categorías conceptuales que a menudo se confunden y/o se superponen en el discurso. Aparte de su dimensión física, la capacidad de efectuar un trabajo es una potencialidad humana. Mientras que el empleo es sólo un artificio cultural y económico de las primeras fases de la sociedad industrial, que ha permitido estructurar la división social del trabajo y la distribución parcial de la riqueza sin alterar sustancialmente las pautas del Orden Establecido en una sociedad regida por el modelo productivo capitalista.

Por circunstancias tecnológicas y socioeconómicas, el volumen global de empleo disponible en el sistema productivo de un país desarrollado

es decreciente, con lo que el repetido mantra político de la “creación de empleo” no es, a estas alturas, más que una creencia quimérica. Es un hecho innegable que, en la medida en que avanza el progreso tecnológico, se produce una avería en ese artefacto del empleo. Avería que los técnicos del sistema han ido parcheando hasta darse de bruces con el fallo principal: el trabajo, Marx Dixit, acabó convertido en una mercancía más: el empleo. Justo la única mercancía que el sistema de mercado es incapaz de suministrar a toda la población. Con lo cual, el empleo pierde la doble función económica e integradora.

Se impone, pues, cambiar de paradigma. “Hay que desligar el empleo de la supervivencia”, afirma el nonagenario sociólogo polaco Zygmunt Bauman, explicando que, “cuando la norma era el empleo, la palabra ‘desempleado’ subrayaba que eso estaba fuera de la norma, que la norma era el empleo. El desempleo era anormal. Hoy en los países anglosajones ya se utiliza la palabra ‘redundant’, redundante, para hablar de los desempleados. La palabra ya no precisa que la norma sea el empleo, sino que es un veredicto en el mercado laboral, de que es gente inútil, un problema de ley y orden más que un problema social”.¹

En el último Foro de Davos, que convocó en esa ciudad suiza a las élites económicas del mundo, en enero de 2016, los allí reunidos manejaron un estudio que alerta sobre la destrucción de empleo a corto plazo en las 17 principales economías. Es un primer efecto inmediato de la Cuarta Revolución Industrial. Tras la automatización de la industria en el siglo XVIII (Industria 1.0), la división del trabajo y la producción en cadena de principios del siglo XX (Industria 2.0) y la revolución tecnológica de finales del siglo XX (Industria 3.0), ahora se trata de la digitalización de los sistemas de produc-

Universal Basic Income, is the worst solution?

ción que impactará en las empresas, afectando a las personas, la sociedad y los países.

El documento de Davos analiza las transformaciones que la economía mundial y el mercado de trabajo padecerán en el próximo lustro. Entre sus advertencias se afirma que, a causa de la automatización, se perderán unos siete millones de empleos “de oficina”. El estudio predice el desarrollo en las áreas de inteligencia artificial, robótica, nanotecnología e impresión 3D. Esta transformación provocará que algunos empleos sean superfluos e innecesarios, aunque abrirá la oportunidad a otra gran gama de empleos. Los economistas que firman el estudio advierten que esta pérdida se compensará con la creación de otros dos millones de nuevos empleos en las áreas de computación, ingeniería, arquitectura y matemática.²

No obstante, la diferencia entre creación de nuevos empleos y destrucción de oficios obsoletos se salda con una destrucción neta de empleo. Caminamos, pues, hacia el modelo que hace tiempo se ha descrito como Sociedad 20-80, en la que bastará el trabajo del 20% de la población activa para hacerla funcionar. Esa minoría de trabajadores cualificados será suficiente para asegurar el control de las máquinas y procesos productivos. El 80% restante de la población sólo tendrá acceso a empleos de bajísima cualificación, serviles en su mayoría, o se verá condenada al desempleo estructural.

Unida a la aplicación de políticas neoliberales, la reducción de la oferta de empleo derivada de la automatización ha dado lugar a un fenómeno, a la vez paradójico y atroz: para la mayoría de los empleados con contratos precarios trabajar ya no les sirve “para salir de pobres”. Sobre todo en la última década, la pobreza ha conocido un brutal

incremento que ha sorprendido a las clases medias que confiaban en el orden capitalista establecido. Muchos de sus miembros, especialmente de la generación más joven, se han visto atrapados en esa encerrona descrita por Viviane Forrester en este vívido retrato del *horror económico*: “¡Seguimos rutinas insólitas! No se sabe si es cómico o siniestro que, ante la falta constante, indesarraigable y creciente de puestos de trabajo, se obligue a los millones de desempleados, cada día laborable de la semana, el mes o el año, a salir a la búsqueda “efectiva y permanente” de ese trabajo que ya no existe. Cada día, semana, mes, año, se los condena a postularse en vano, frustrados de antemano por las estadísticas”.³

De ahí que comience a calar con fuerza en el debate social la propuesta de garantizar un ingreso mínimo e incondicional a toda la población. Una medida vigente desde 1986 en el estado de Alaska y cuya aplicación está hoy en estudio en Finlandia y en Holanda. Por cierto, la idea no es un invento de hace cuatro días. Sus fundamentos filosóficos y políticos fueron planteados, ya en el siglo XVIII, por el estadounidense Thomas Paine y el francés Charles Fourier. Siguiendo esa estela, figuras de indiscutible autoridad intelectual o científica como el filósofo y matemático Bertrand Russell, el ‘padre’ de la Cibernética, Norbert Wiener, el psicólogo social Erich Fromm, así como destacados economistas han defendido la idea de la Renta Básica Universal (RBU).

notas

¹ <http://www.lavanguardia.com/cultura/20160216/302211659733/zygmunt-bauman-empleo-supervivencia.html>

² <http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7285610/01/16/La-Cuarta-Revolucion-Industrial-eliminar-7-millon-de-empleo-hasta-2020.html>

³ Forrester, Viviane: *El horror económico*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1977, p. 17.

Renta Básica Universal ¿La peor de las soluciones?

Conforme a la definición adoptada por la Basic Income Earth Network, es “una renta garantizada de forma incondicional a todos los individuos, sin necesidad de someterse a una prueba de recursos ante la Administración o de estar realizando algún tipo de trabajo”. Se trataría, pues, de un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad: incluso si no quiere trabajar, sin tener en cuenta si es rico o pobre, sin importar con quien vive.

Estamos hablando, claro está, de algo bien distinto de esas humillantes condicionales rentas de inserción que constituyen, de facto, un factor de servidumbre y dominación sobre las personas. Porque en democracia, un ciudadano de pleno derecho es parte integrante de la comunidad política en la que vive y, por tanto, no necesita ser insertado en lugar alguno. Una renta percibida como derecho de ciudadanía contribuiría, de paso, a dignificar la acción de los profesionales del trabajo social, relevándoles de la desagradable misión que hoy tienen asignada de vigilar y castigar a los perceptores de ayudas cuyo carácter condicional lleva implícita siempre la sospecha de convertirse en potenciales defraudadores.

La RBU es una medida destinada a prevenir la pobreza *antes* de que ésta afecte a una persona. Pobreza cuyo factor principal, como estamos viendo, es la falta de empleo remunerado de forma suficiente para llevar una vida digna. Asignar a todo el mundo una renta mínima sería mucho más eficaz, en términos de ahorro de sufrimiento social y complejidad administrativa, que las ayudas que hoy, con gran cicatería presupuestaria, conceden las Administraciones, a través de los servicios sociales, a la gente que demuestra haber caído en situación de pobreza. Esta ayuda sólo se concede después de que la persona en

cuestión haya demostrado, sometiéndose a un test de recursos, que no dispone de medios suficientes para vivir.

Las élites económicas que dictan las directrices que mueven el mundo actual tienen muy clara esta avería del artefacto del empleo. Y son conscientes, asimismo, de que, tarde o temprano, será necesario suministrar a la población un sustento mínimo. Pero como sus objetivos no están regidos por la filantropía, es lógico que no vayan a ser estas élites quienes den el primer paso. Porque intuyen, con clarividencia, que un ingreso garantizado: al proporcionar seguridad individual, aumentaría la libertad real de acción de las personas, que ya no se verían obligadas a suplicar una ayuda o un empleo precario para subsistir. En definitiva, un ingreso garantizado concebido como derecho de existencia, al empoderar a la mayoría social significaría un detrimento del poder actual de las élites.

En la práctica, el presupuesto que las políticas de corte neoliberal destinan a este tipo de ayudas condicionales a la indigencia es muy limitado. El subsidio por desempleo –indemnización que el Sistema debe abonar por su ineficacia a la hora de suministrar empleo a la población– apenas llega a la mitad de los damnificados por la avería del artefacto. Y otro tanto sucede con la cobertura de las rentas de inserción, también hoy llamadas ‘rentas básicas’ con un claro propósito de desvirtuar la idea original de la RBU.

En el mejor de los casos, es decir, que un Gobierno con gran sensibilidad social dotase la partida de ayudas con presupuesto suficiente para atender todas las demandas, el procedimiento adolece de un problema de índole funcional. Desde que se produce la circunstancia de pobreza hasta que la Administración la certifica, transcurre un periodo

Universal Basic Income, is the worst solution?

de tiempo, a veces muy dilatado, durante el cual la carencia de recursos conduce a una situación desesperada a las personas desprovistas de otros medios de vida.

Desde la promulgación de las *Poor Laws* inglesas y el sistema de Speenhamland en el siglo XVII hasta hoy, el hecho de que cada cierto tiempo reaparezca de manera recurrente la propuesta de crear nuevas modalidades de rentas mínimas sujetas a requisitos de condicionalidad es un signo inequívoco de su ineficacia política y social. Por lo que parece llegada la hora de que el pensamiento político avanzado se decida a salir de la zona de confort ideológica, abandone supersticiones económicas y prejuicios moralizantes y busque soluciones más eficaces, justas y generadoras de igualdad.

Es preciso romper ese círculo vicioso que consiste en propugnar más ayudas condicionales a la pobreza que, por definición, necesitan justificar su vigencia en el hecho de que siga habiendo pobres. Pues lo que parece obvio es que la aplicación de un ingreso garantizado para todas las personas, cuya cuantía fuese de un céntimo por encima del umbral de la pobreza, eliminaría ésta también por definición.

Un crítica inmediata a la RBU es que fomentaría la vagancia. Objeción que ya no se sostiene en un momento en que la principal causa de ociosos forzados es la falta estructural de empleo. Otra crítica habitual es que su universalidad obliga a dársela también a los ricos, lo que sería injusto. Pero esta segunda crítica olvida que todas las grandes conquistas sociales han consistido, precisamente, en universalizar derechos, desde la educación, la sanidad o el sufragio, que hasta su generalización social eran privilegio sólo de los ricos. Hoy, ricos y

pobres votan en la misma urna, y a ninguna persona adinerada se le niega ser atendida en caso de enfermedad en un hospital público o que lleve a sus hijos a una escuela pública. Casos infrecuentes en la práctica pero que, al atenerse al criterio de universalidad, permiten que estas prestaciones lleguen a millones de personas con escasez de recursos.

Así que, colocando en un plato de la balanza las virtudes de la RBU y en el otro algunos de sus pequeños defectos, podremos concluir que se trata “del peor de todos los sistemas de protección social... con excepción de todos los sistemas restantes”, parafraseando cierta caracterización de la democracia atribuida a Winston Churchill.

Al igual que la democracia, pese a todos sus defectos, elimina al menos los males producidos por las dictaduras, el ingreso garantizado abre ante la mayoría de la población un horizonte de libertad real frente a la opresión liberticida del totalitarismo económico. Porque, como la más pura y cruda realidad política, económica y social demuestra con nitidez, todas las recetas clásicas para acabar con la pobreza han fracasado estrepitosamente.

Cuando todas las soluciones clásicas han demostrado conducir a un callejón sin salida, sobre todo a esa juventud que integra las filas del precariado, la propuesta de la Renta Básica Universal es uno de los ejes sobre los que ha de girar el nuevo contrato social que, más pronto que tarde, será preciso establecer para equilibrar la devastación causada por las políticas de la globalización neoliberal.